

Santiago de Cali, 18 de junio del 2021

Señor

HERBERT LOBATÓN CURREA

Secretario General

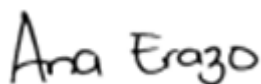
Concejo Distrital de Santiago de Cali

REFERENCIA: Radicación proyecto de acuerdo ““**POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON ENFOQUES DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**”

En mi calidad de concejala y con el fin de que surta el trámite respectivo ante la corporación y en cumplimiento del reglamento interno, cordialmente me permito radicar proyecto de acuerdo de la referencia en un archivo original.

Anexo lo anunciado.

Atentamente;



Ana Leidy Erazo

Partido Polo Democrático Alternativo

“POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON ENFOQUES DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objetivo

Promover el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales del municipio de Santiago de Cali distrito especial, mediante la puesta en marcha de un programa de formación, que desde los enfoques de derecho, diferencial y de género, posibilite la reducción de las brechas y desigualdades que viven las mujeres de las zonas rurales, así como la articulación entre el ámbito rural y urbano del municipio desde la equidad y la justicia social.

2. Introducción

2.1 Contexto América Latina

Cumplidos los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, donde las mujeres rurales tuvieron un gran protagonismo y todos los estados firmantes se acogieron a las recomendaciones que en materia de salud, educación, empleo, trabajo y demás derechos para ellas les hizo esta conferencia mundial, es preocupante encontrar que, pese a que ha habido algunos avances en cuanto al reconocimiento formal de sus derechos, son muchos los ámbitos en los que aún persisten enormes barreras estructurales para las mujeres rurales, lo que les impide gozar de una vida digna, libre de violencias y con una efectiva equidad de género.

Al parecer no ha bastado con todas las políticas que en materia de derechos para las mujeres rurales han formulado los diferentes países de la región, ni que desde diciembre de 2007 Naciones Unidas haya establecido el Día Internacional de las Mujeres Rurales para que sea conmemorado anualmente el 15 de octubre. Conmemoración que debería suponer, el pleno reconocimiento de su rol y sus aportes al desarrollo y la vida de la naciones por su participación en la producción de alimentos y como las principales responsables de la transmisión del conocimiento, que abarca desde la perpetuación de la historia de sus pueblos hasta los saberes técnicos, como son el manejo agroecológico, la selección de semillas, la reproducción de plantas en extinción o los usos medicinales de las hierbas (Unión Europea; FAO; MinAgricultura, 2020).

Las mujeres rurales de la región latinoamericana han enfrentado históricamente condiciones de vida marcadas por la marginalidad y la desigualdad. Esto tiene que ver con las raíces coloniales desde las cuales se han ido construyendo los estados modernos de la región, con un fuerte legado de violencias producto del racismo, del despojo, la explotación y con un problema neurálgico como es el acceso a la propiedad de la tierra – posteriormente agudizado con los efectos generados por las políticas neoliberales en la economía y en el papel del Estado cada vez más reducido (Bravo & Bernardini, 2011). Las mujeres rurales, son también en su mayoría indígenas o afrodescendientes. Hacen parte de esos grupos históricamente discriminados y la tierra constituye el eje fundamental de su construcción identitaria, de sus imaginarios frente a la vida, de sus dinámicas cotidianas y de su posibilidad de gozar efectivamente de otros derechos que se desprenden de su rol como propietarias.

De ahí que el tema de las reformas agrarias haya sido siempre parte principal de las demandas durante los procesos de protesta y levantamientos que han llevado a cabo las organizaciones que conforman el movimiento campesino latinoamericano y del que las mujeres hacen parte fundamental, aunque la mayor parte de los gobiernos no ha tomado en serio las necesidades de ellas en los programas de redistribución de la tierra, en las reformas agrarias o en los proyectos para privatizar la tierra mediante contrarreformas (León & Deere, 1997). Las demandas de las mujeres rurales han girado principalmente en torno al acceso a la propiedad de la tierra pues han entendido que de éste depende la posibilidad de fortalecer sus procesos organizativos comunitarios, su autonomía, la soberanía alimentaria de sus comunidades, de lograr el mejoramiento de sus ingresos y capacidad de consumo, la independencia económica frente a sus compañeros de vida en caso de vivir situaciones de violencias de género a las cuales son más vulnerables por la histórica dependencia económica de sus parejas, y de paso, la posibilidad de incidir en las decisiones frente al territorio.

Sin embargo, también es importante resaltar que si bien la propiedad de la tierra es una condición necesaria e inaplazable tampoco es suficiente para mejorar la vida de las mujeres rurales. También hay que tener en cuenta que además de que éstas permanecen en una situación de desigualdad y exclusión social, política y económica, con apenas el 30% de titularidad de la tierra, del 10% de los créditos y del 5% de la asistencia técnica (Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, s.f.), tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos como educación, la asistencia sanitaria, ni a infraestructura como el agua o saneamiento. El mismo panorama viven frente al acceso a la información y a la capacidad de compartir y aprender (FAO, 2011), así como el acceso a los activos y a los insumos modernos de producción (Ballara, Damianović, & Valenzuela, 2012).

Las mujeres rurales son quienes más trabajan, las que menos ganan y las que menos tiempo de ocio tienen pues son las principales encargadas de cuidar y la sostener la vida¹. Así lo muestran las encuestas de uso del tiempo en la región², y como es de esperarse, todas esas barreras estructurales mencionadas antes, así como las normas sociales discriminatorias y sexistas, que derivan en la infravaloración del trabajo doméstico de reproducción que, en su mayor parte, es ejecutado por mujeres, determinan las oportunidades que ellas mismas tienen para participar en la esfera pública (Araya, María José. 2003).

Son también las mujeres quienes sufren de manera desproporcionada los múltiples efectos de la pobreza, evidenciado mundialmente y con pocas excepciones, en todos los indicadores de género y desarrollo que muestran que las mujeres campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas ya que tampoco están integradas equitativamente al sistema productivo. Su situación de exclusión se manifiesta en los mercados laborales agrícolas, donde en puestos similares, obtienen

¹ De acuerdo con la definición de Amaia Pérez Orozco (2006), por cuidados podemos entender la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud, la necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida. Presenta una doble dimensión “material”, corporal –realizar tareas concretas con resultados tangibles, atender al cuerpo y sus necesidades fisiológicas– e “inmaterial”, afectivo-relacional –relativa al bienestar emocional (10).

² Desde la realización de la Plataforma de Acción De Beijing en 1995 y posteriormente la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en 2007, los Estados se han comprometido a “hacer visible la importancia relativa del trabajo no- remunerado realizado fuera del mercado y valorar la producción de bienes y servicios y la contribución al consumo y bienestar de los hogares y de la sociedad que representa el trabajo no-remunerado realizado fuera del mercado; así como a desarrollar instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus resultados al sistema de cuentas nacionales y diseñar políticas económicas y sociales en consecuencia (Milosavljevic, 2009). Con pocas diferencias lo que muestran año tras año las Encuestas nacionales sobre el uso del tiempo -ENUT- en la región Latinoamericana, es que las mujeres siguen siendo las responsables y socio-culturalmente designadas para llevar a cabo las actividades de cuidado, así trabajen por fuera del hogar remuneradamente, lo que constituye una doble jornada de trabajo que aunque no es valorado socialmente ni remunerado económicamente, es esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo y para sostener la vida. En Ecuador, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, en el acápite sobre el manejo del tiempo, evidenció que aunque hombres y mujeres han reducido el tiempo que le dedican a las tareas domésticas, las mujeres destinan 14,14 horas semanales más que los hombres a realizar estas actividades (INEC junio 2010 y junio 2012). De manera similar se observa en Chile, donde la primera ENUT arrojó que en un día las mujeres destinan en promedio a nivel nacional 3 horas más que los hombres al conjunto de todas las actividades de trabajo no remunerado (ENUT, 2016). Los resultados de la ENUT 2019 en México revelaron que las mujeres dedican cinco veces más horas que los hombres al trabajo no remunerado, es decir que mientras los hombres destinan tan sólo ocho horas a labores del hogar, ellas dedican hasta 39 horas. Para el caso colombiano, la ENUT realizada por el DANE en el año 2016, “dejó en evidencia que las mujeres soportan una carga total de trabajo diario superior a los hombres, no solo por ser quienes generalmente llevan a cabo las labores domésticas y de cuidados personales en el hogar, sino porque cada vez ingresan más mujeres al mercado laboral...” Universidad de Antioquia (2019). Al respecto, no es un dato menor el que resalta el Primer informe sombra de mujeres rurales y campesinas en Colombia (2019), sobre que las cifras del DANE (2017), evidenciaron que el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Colombia en 2017 fue de 185.722 millones de pesos, cantidad superior al valor agregado bruto de las actividades económicas más relevantes de la economía colombiana a precios corrientes de 2017, con una participación de 20,0 % del Producto Interno Bruto (PIB).”

salarios inferiores al de los hombres y todo esto tiene que ver con los estereotipos e imaginarios que sobre ellas pesan, no sólo al interior de sus comunidades y familias, sino, desde los mismos estados, pues mucho de su trabajo productivo sigue siendo considerado como trabajo doméstico y por lo tanto no es reconocido ni remunerado.

Las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial y de acuerdo con la FAO (2020), representan aproximadamente a la mitad de la mano de obra agrícola del mundo y más del 40 por ciento de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo. En la mayoría de las regiones existen más probabilidades de que las mujeres trabajen en la agricultura y no en otros sectores y, sin embargo, pese a que son ellas las que plantan las semillas que alimentan a naciones enteras pues son las principales productoras de cultivos alimentarios, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático, en la mayor parte del mundo aún viven en condiciones de desventaja.

La visión estereotipada de la agricultura campesina latinoamericana se ha basado en la parcela o finca familiar, con una división del trabajo según la cual la cabeza masculina del hogar es el principal agricultor, y la esposa o compañera es la “ayudante”. Esta visión ha sido perpetuada por los censos agrícolas y los investigadores que dependen de ellos para realizar su análisis comparativo (Boserup, 1970; como es citado en Bravo & Bernardini, 2011), incidiendo en la formulación de políticas públicas poco ajustadas a la realidad lo que dificulta la posibilidad de reducir las brechas de género que afectan a la mujer rural.

También se observa que la relación directa entre analfabetismo y mujer rural no ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, por lo que la población femenina, adulta y rural sigue siendo el sector que presenta los más bajos niveles educativos en América Latina -pues tiene mayoritariamente estudios primarios incompletos o menos- y, al existir una relación directa entre el nivel educativo y el ingreso, este sector recibe los salarios más bajos, lo que a su vez las predispone a sufrir con más rigor la incidencia de la pobreza y ver limitadas las posibilidades de ejercer una ciudadanía plena. Todas esas diferencias se agudizan si se incorpora como variable de análisis la etnicidad (Bravo & Bernardini, 2011), en un sector como el rural donde buena parte de sus mujeres pertenecen a etnias indígenas y afrodescendientes.

Más aún, el trabajo de las mujeres escasamente está cubierto por derechos legales y acuerdos laborales colectivos o seguridad social, lo que a su vez lleva a que en los hogares rurales, sean las mujeres quienes están más rezagadas en cuanto al acceso a la protección social contributiva, dado que la seguridad social se configura principalmente para proteger al “proveedor masculino” y a su familia, por lo que se ha subordinado el acceso de las mujeres a la seguridad social a la situación de sus cónyuges (FAO, 2015a).

2.2 Contexto actual

Sumado a todas estas problemáticas previas y específicas en su vida diaria que las ponen en situación de desventaja, las mujeres rurales se enfrentan hoy a nuevas problemáticas globales generadas, entre otras, por la globalización que marca los sistemas socioeconómicos nacionales y da lugar a los llamados transnacionalismos que en el caso de las industrias agroexportadoras modifican el escenario generando nuevos puestos de trabajo en los que se insertan de manera creciente las mujeres sin que ello implique necesariamente mejores condiciones laborales, así como la situación de desventaja para competir con sus productos ante empresas multinacionales (Bravo & Bernardini, 2011).

También enfrentan situaciones generadas por el calentamiento global con los abruptos cambios climáticos y desastres que éste genera y que afectan de manera particular al campo con su poca infraestructura y con la presencia de animales y cultivos de alimentos que pueden perderse. Además, ahora se enfrentan a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, que puso en evidencia las necesidades no resueltas en el acceso a salud, medicamentos esenciales y vacunas en zonas rurales y remotas.

De acuerdo con el Informe *Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe* llevado a cabo por la CEPAL y la FAO (2020), como consecuencia de la crisis del covid-19 en América Latina, se estima que si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría incrementarse 3,5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumentará 2,3 puntos porcentuales, alcanzando al 13,5% de la población de la región, la incidencia más alta de las últimas dos décadas. Eso implica que 15,9 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema, con lo que afectaría a 83,4 millones de personas en 2020.

El número de personas en situación de pobreza extrema alcanzaría 53,4 millones en las áreas urbanas y 30 millones en las áreas rurales. Señalan además estos organismos, que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de los países, las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad. En América Latina y el Caribe, la pobreza y la pobreza extrema son más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo con las exploraciones más recientes de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en este momento de emergencia global que representa el COVID-19, las

mujeres rurales enfrentan los mismos desafíos que todas las mujeres – la agudización de la crisis de cuidados, la precariedad económica y el incremento de la pobreza, la falta de acceso a bienes y servicios esenciales, la limitada movilidad, y el incremento de la violencia de género– pero las enfrentan desde el ámbito rural que presenta una serie de obstáculos adicionales, incluyendo mayores tasas de desnutrición, la desaparición de servicios públicos junto con un incremento en la carga de cuidado, la devastación de comunidades rurales pobres con la propagación del COVID-19, y la interrupción de la cadena de producción alimenticia que impacta particularmente a productoras de alimentos a pequeña escala (OEA, 2020).

2.3 Situación de las mujeres rurales en Colombia

Existen serias falencias en los diagnósticos oficiales sobre el campo colombiano, por lo tanto, la información sobre la situación de las zonas rurales, especialmente a nivel departamental y municipal puede ser dispersa, incompleta o desactualizada. Así lo advierte el informe Sombra mujeres rurales y campesinas en Colombia (2019), cuando señala que persiste la ausencia de información frente a la aplicación de la Ley 731/2002 y la falta de políticas y programas encaminados a promover la situación de las mujeres rurales. Los esfuerzos realizados por el Estado son insuficientes frente a la realización de Tercer Censo Nacional Agropecuario del 2014 (TCNA) y la inclusión de indicadores que visibilicen la situación de las mujeres rurales y campesinas, persistiendo situaciones de discriminación que limitan el ejercicio de las libertades y sus derechos. Sin embargo, a partir de los datos disponibles, se presentará a continuación un panorama general sobre la situación de las mujeres rurales en el país.

Colombia ha ratificado su compromiso en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, mediante la creación de diferentes leyes que fueron expedidas después de la aparición y presión de los grupos de mujeres organizadas y de los mandatos emitidos por las convenciones internacionales a favor de las mujeres ya muy conocidos, como la de la CEDAW en 1979, la de Belem do Pará en 1994 o la de Beijing en 1995, entre otras.

Las recomendaciones emanadas de dichas normativas internacionales fueron incorporadas al marco legal nacional y con el paso de los años se fueron materializando entre otras, en la creación de diferentes instituciones y programas con enfoque de género en el país, como son la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Observatorio de Asuntos de género, la Mesa interinstitucional para erradicar la Violencia contra las mujeres, el Fondo de fomento para las mujeres rurales, las comisarías de familia, las secretarías de la mujer, solo por mencionar algunas. Sin embargo, y pese a contar con un marco normativo idóneo y con todas estas instituciones enfocadas puntualmente en responder a las necesidades de las mujeres colombianas, la situación de éstas sigue siendo preocupante ya que se siguen enfrentando a múltiples barreras para acceder al goce pleno de sus Derechos Humanos. Problemáticas estructurales como el conflicto social y armado que genera pobreza y

desplazamiento forzado, las violencias sexuales y de género, entre otras, que se desprenden puntualmente de la existencia de las brechas de género, persisten en Colombia y de manera muy especial azotan a las mujeres rurales del país.

La persistencia de dichas problemáticas se debe a que ha habido pocas garantías para materializar lo que les ha ofrecido la formulación de políticas y planes a las mujeres rurales en Colombia, los cuales no se cumplen o han sido marginales y discontinuos. En Colombia como en muchos de los países de la región latinoamericana, la mayoría de los programas son interrumpidos o finalizan cada periodo en que se dan los cambios de gobierno y los temas de Mujeres o de Género, así como también el tema de Desarrollo Rural, son demasiado sensibles a la voluntad política de los gobiernos o son restringidos por las políticas de ajuste. La inestabilidad de las políticas va acompañada por la pérdida de la memoria institucional, los cambios de funcionarios dedicados a estas labores o la desaparición de los grupos asignados a la temática y la mínima dedicación de recursos de apoyo del estado en la búsqueda de la equidad (Gutiérrez, 2003).

El sector rural colombiano es heterogéneo como lo son sus problemáticas. Es un sector que aglutina población de diferente procedencia étnica como población indígena y población afrodescendiente y en el que, además, habita población que ha sido víctima del conflicto social y armado -especialmente quienes han sido desplazados forzosamente-, conflicto que se ha acrecentado también por la débil presencia del estado en sus territorios lo que pone en jaque la garantía de sus derechos básicos-. Es a su vez, un sector que en la actualidad afronta diversas situaciones que menoscaban las condiciones de vida de sus hombres y mujeres, entre ellas están las políticas económicas del gobierno nacional que los enfrenta al incremento de las importaciones agrícolas pactadas en los TLC y con las cuales compiten en condiciones muy desfavorables con la producción extranjera. Esto ha llevado a una creciente situación de pobreza a la población campesina, que siguiendo la tendencia de la región, tampoco es poseedora de la tierra.

Por otro lado, los y las campesinas enfrentan la violencia que se ha recrudecido en sus territorios debido a la tendencia del gobierno nacional de no cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz y de ese modo, no suplir deudas que son históricas con las mujeres y hombres campesinos de Colombia y que son quienes han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto social y armado en sus territorios. Algunas de esas deudas son por ejemplo, materializar políticas para el logro de la paz, el darle un trato social y humanitario al tema de la sustitución de los cultivos ilícitos, el apoyo a la consolidación y expansión de las Zonas de Reserva Campesina, el manejo del recurso hídrico y la protección de zonas de reserva como los páramos, la Reforma Rural Integral que posibilite la erradicación la pobreza, la integración de las regiones, la promoción de la igualdad y el aseguramiento del pleno disfrute de los derechos de la población campesina en el país, de la que las mujeres son parte fundamental.

De acuerdo con lo hallado por Magdalena León y Carmen Deere en sus múltiples trabajos, las anteriores han sido problemáticas recurrentes desde décadas atrás, puesto que la población rural colombiana ha vivido históricamente bajo circunstancias muy desfavorables de cruces de violencias, crisis política, deslegitimación del Estado y concentración de la tierra, como resultado del enriquecimiento ilícito o reforma agraria ilegal (León & Deere, 1997).

2.4 Quiénes son las mujeres rurales de Colombia

De acuerdo con la Ley 731 de 2002, la mujer rural *es toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada.*

Conforme con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, llevado a cabo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE: en Colombia la mayoría de la población corresponde a mujeres: para 2019 el 51,16% de la población nacional correspondió a mujeres, equivalentes a 25.271.995 personas. En las zonas rurales se ubicó el 24,2% de la población del país, es decir 11.969.822 personas: el 48,13% de la población rural son mujeres (5.760.524 personas), es decir casi la mitad de la población rural y el 51,87% son hombres (6.209.298 personas). Según la pirámide poblacional de las zonas rurales, ésta se concentra en los grupos etarios de corta edad: 37,5% de las mujeres (2.159.425 personas) y 37,2% de los hombres (2.310.949 personas), son menores de 20 años; concentrados principalmente en niñas y niños de 0 a 4 años (9,7% de la población rural).

En las zonas rurales 2.497.266 personas se autorreconocen dentro de algún grupo étnico; estas personas corresponden al 51,06% del total de la población con autorreconocimiento étnico en el país. El 78,1% de las mujeres que se autorreconocen como indígenas, habitan en zonas rurales, es decir 745.505 mujeres. Además, la Tasa Global de Participación de las mujeres es inferior a la de los hombres y la mayoría de ellas que están inactivas en el mercado laboral se dedican a actividades de trabajo no remunerado.

En 2019, en las zonas rurales la tasa de ocupación de las mujeres fue más baja que en las zonas urbanas y registran una brecha de la tasa de ocupación entre mujeres y hombres aún mayor que en las zonas urbanas, lo que se puede atribuir al hecho de que “la participación de la mujer rural en el mercado laboral se ve limitada por las horas dedicadas a trabajos domésticos y al cuidado de sus hijos, además por emplear la mayor parte de su cosecha para el autoconsumo, ocasionando que se considere menos productiva que sus pares masculinos” (Bedoya, J. M, Velásquez, C. L. (2020).

En las zonas rurales las mujeres ocupadas se emplean principalmente en actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (36,2%), comercio, hoteles y restaurantes (27,3%), servicios comunales, sociales y personales (18,6%) e industria manufacturera

(11,5%). Por su parte, solo las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca concentran al 71% de los hombres ocupados. Por otro lado, según la Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA, de los 2.033.967 productores agropecuarios registrados en dicha operación en el segundo semestre de 2019, el 26,1% eran mujeres (529.968 personas). Un alto porcentaje de ellas (38,1%) se encuentra entre los 50 y 64 años de edad. En la última década la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales ha sido superior a la de los hombres en por lo menos 6,5 puntos porcentuales, con promedio de 8,6 puntos porcentuales.

En cuanto a seguridad social, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH, 2020), en las zonas rurales el 10,3% de los hombres ocupados y 6,9% de las mujeres ocupadas no cuentan con afiliación a salud y el 85,3% de ellas no cotizan en un fondo de pensión. Esta carencia de protección social de la población campesina, puede ser también el resultado de la precarización del trabajo rural, debido a la falta de políticas agrícolas proteccionistas, de vías e infraestructura para el transporte y comercialización de sus cultivos y del creciente empobrecimiento al que se ha visto enfrentada la población campesina con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con EU.

Por otra parte y como ya se mencionó antes cuando se explicó en qué consiste el trabajo no remunerado y de cuidados que llevan a cabo principalmente las mujeres, en las zonas rurales del país el promedio total de horas de trabajo diario de las mujeres también es mayor al de los hombres y la mayor parte de ese trabajo es no remunerado. Las mujeres rurales trabajan en promedio 1 hora con 11 minutos más que los hombres al día. Dentro de las actividades no remuneradas que son poco frecuentes en zonas urbanas, las mujeres en zonas rurales tienen mayor participación en la cría de animales para el consumo del hogar; el 12,9% de las mujeres participa en esta actividad.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2016-2017 incluyó una pregunta para medir la percepción de la población sobre estereotipos de género. En general las respuestas evidenciaron, que tanto hombres como mujeres rurales mantienen imaginarios sexistas en relación con la responsabilidad y la idoneidad de las mujeres para llevar a cabo el trabajo de cuidados y domésticos y frente al rol del hombre como cabeza de la familia y único proveedor.

La persistencia de estos imaginarios que han sido naturalizados entre hombres y mujeres rurales va de la mano con una alta tolerancia social a las violencias basadas en el género (VBG) que ha existido históricamente en el campo y también en algunos servidores públicos que no atienden los casos y terminan estimulando a las mujeres para que no denuncien, es decir, revictimizándolas. Sin embargo, también es importante decir que estas violencias son poco visibilizadas dentro de las estadísticas nacionales debido al subregistro que se da como resultado de que en las zonas rurales existe una menor cobertura de las entidades a través de las cuales se garantiza el acceso a la justicia (operadores judiciales especializados en derechos de la mujer, la Fiscalía General de la Nación, el INMLCF, las

Comisarías de Familia, las Casas de Justicia, así como las Estaciones de Policía y los órganos de control) y a que las mujeres rurales tienen mayores dificultades para desplazarse y denunciar o recibir una ayuda idónea por parte del Estado (Unión Europea; FAO; MinAgricultura, 2020).

Finalmente, es importante mencionar que la Encuesta de Cultura Política (ECP) de 2019, en Colombia el 29,9% de las mujeres y 33,8% de los hombres se identifican subjetivamente como personas campesinas. En las zonas rurales, estos porcentajes son de 83,6% y 85,8% respectivamente. El 10,4% de las mujeres rurales identificadas subjetivamente como campesinas no tienen ningún nivel educativo, lo que repercute directamente en su posibilidad de conseguir un empleo, obtener ingresos más altos y mejorar las condiciones de vida propias y de sus hijos e hijas.

2.5 Situación actual

Varias situaciones en relación con las mujeres rurales en Colombia siguen siendo complejas. En enero de 2019 el Estado colombiano se abstuvo de suscribir la declaración de la ONU sobre Derechos de Campesinos y Otras Personas que trabajan en las zonas rurales, lo que provocó que varias organizaciones sociales mostraran preocupación por la abstención del país a apoyar la iniciativa que toca directamente a uno de sus grupos poblacionales más vulnerables por la exclusión y la violencia histórica, al hacer prevalecer acuerdos comerciales sobre lo que son derechos fundamentales. Esta actuación del gobierno nacional es poco alentadora y se advierte la misma actitud frente a otros asuntos como la lucha de los campesinos por proteger los páramos de la minería ilegal y de las grandes compañías que explotan los recursos naturales a gran escala, como el cumplimiento con los Acuerdos de paz, entre otros que afectan de manera directa a hombres y mujeres rurales.

Por otro lado, tenemos que en el país las importaciones de alimentos llegaron a las 12 millones de toneladas en 2016, lo que ha generado el empobrecimiento de las zonas rurales y motivado la migración de los campesinos hacia las ciudades. Para ellos, los tratados de libre comercio entran a competir con una comunidad de campesinos que no tiene acceso al crédito ni mucho menos a las herramientas tecnológicas con las cuales podrían aumentar su competitividad, pues “aunque tengan la propiedad de la tierra entran en quiebra porque no pueden pagar los costos de producción o producir a los precios impuestos por el mercado, y dicha situación trae consigo un considerable crecimiento de la población en las ciudades” (Agencia de Noticias UN, 2017). La importación de alimentos lleva a que gran parte de estos territorios carezcan de seguridad alimentaria y como vimos antes, las mujeres rurales enfrentan todas estas problemáticas de manera muy aguda, por su rol como productoras de alimentos.

Partiendo de la situación de falta de apoyo y de subsidios por parte del estado y el consecuente empobrecimiento de las poblaciones rurales del país, encontramos que además,

enfrentan de manera similar a la población rural de toda la región latinoamericana los problemas generados por el calentamiento global y la pandemia del covid-19.

En cuanto a violencia intrafamiliar, en 2015 el número total de casos reportados a nivel nacional fue de 74.022, de los cuales 4.385 corresponden a casos de violencia en zona rural (5,9%). De estos últimos, 3.414 (77,9% del total en el área rural) estuvieron asociados a violencia basada en género. Entre 2015 y 2018, el número de casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres a nivel nacional aumentó 3,0% y en zonas rurales 40,9%. Además, las denuncias de violencia intrafamiliar siguen siendo mayores para las mujeres que para los hombres. Se destaca también que el tipo de violencia para el que se reporta el mayor número de casos de atención a mujeres, tanto en zona rural como urbana, es la de violencia de pareja. Respecto a los casos de violencia sexual, se observa un aumento en el número de casos de delitos sexuales: 18,1% a nivel nacional y 40,0% en zonas rurales (Unión Europea; FAO; MinAgricultura. (2020).

Es importante resaltar también otra forma de violencia que enfrentan particularmente las mujeres rurales por su rol como defensoras de Derechos Humanos, lideresas ambientales y que tiene relación con la defensa de los territorios y los recursos naturales amenazados por el modelo extractivista, la minería, la agroindustria y el acaparamiento de tierras. De acuerdo con datos entregados en el Primer informe sombra específico de mujeres rurales y campesinas en Colombia (2019), “en el año 2016 fueron asesinadas 138 mujeres y 2.161 fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el área rural (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). Entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de mayo de 2018 han sido asesinados 385 defensoras/es de derechos humanos en Colombia, de los cuales 56 eran mujeres (Cumbre Agraria, Marcha Patriótica, & INDEPAZ, 2018a). Además, al 5 de julio de 2018 se han identificado 123 asesinatos, de los cuales 83,19 % corresponde a defensoras/ es de DD. HH. y tienen relación con conflictos de tierras y recursos naturales. El 80,48 % de estas víctimas hacía parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal (JAC) y/o étnicas. Además, el 14,63 % eran mujeres (Cumbre Agraria, Marcha Patriótica, & INDEPAZ, 2018b)”.

Por otro lado, los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en 2020 reflejan los impactos sobre el mercado laboral de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. En el primer semestre de 2020 la TGP, que es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, mostró que en las mujeres rurales (34,2%) fue menor que la registrada en el mismo periodo de 2019 (39,1%). En los dos primeros trimestres del 2020 la tasa de ocupación en las zonas rurales fue inferior a la del mismo periodo del año anterior: la tasa de ocupación de las mujeres rurales en abril-junio de 2019 fue 35,9%, mientras que en abril -junio de 2020 fue 25,5%. Por su parte, la brecha de la tasa de ocupación entre hombres y mujeres aumentó: en el trimestre abril-junio de 2019 fue de 35,6 puntos porcentuales y en el mismo periodo de 2020 fue de 38,0 puntos porcentuales. La tasa de desempleo de hombres y mujeres en el primer

semestre de 2020 aumentó, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la brecha de género se amplió, manteniéndose la misma tendencia hasta el segundo trimestre del año.

Estos resultados son alarmantes, si tenemos en cuenta que de acuerdo con el Informe situación de las mujeres rurales en Colombia (2010-2018), en el país ya se venía presentando un fenómeno de feminización de la pobreza: en 2018, el 40,4% de los hogares rurales con jefatura femenina eran pobres por privaciones en sus condiciones de vida, el 40,5% de las personas pertenecientes a estos hogares eran pobres por ingresos y el 19,8% estaban en condición de pobreza monetaria extrema (Unión Europea; FAO; MinAgricultura, 2020).

Cuando este informe se presentó el 18 de febrero en la 72ª Sesión del Comité CEDAW, el Estado Colombiano recibió varias observaciones entre las que se destaca la insistencia en la implementación del Acuerdo de Paz con miras a la garantía de los derechos de las mujeres rurales, la protección a las defensoras y la necesidad de avanzar en la formulación de indicadores desagregados y diferenciados geográficamente pues sólo a través de éstos se podrán desarrollar políticas que realmente protejan a las mujeres. En el caso específico de las mujeres rurales y campesinas, el Comité llama la atención sobre la necesidad de estrategias para fortalecer la participación de estas mujeres en instancias de negociación, planeación y toma de decisiones, y de medidas para aumentar el acceso a tierras (CINEP, 2019).

Dice también el informe:

-Que las mujeres dedican más del doble de horas a los trabajos de cuidado del hogar, que no son remunerados y a esto se suma la labor de crianza, que como ya sabemos afecta la participación femenina, pues a mayor número de hijos en el hogar, tiende a decrecer. El informe indica que en 2018 el ingreso mensual promedio de las mujeres que trabajan en el agro fue de \$339.000, frente a \$576.000 de los hombres.

-Que no existe una visión sistémica de la economía que integre la subsistencia, el bienestar, la reproducción social de la vida y las condiciones dignas de las mujeres, que son quienes sostienen este trabajo reproductivo. Este fenómeno persiste en el entorno agropecuario, donde la desigualdad y la inequidad se exacerban en lo relativo a las mujeres, constituyéndose así en uno de los sectores con mayores dificultades para éstas.

-Que tampoco se han implementado medidas para que los derechos de las mujeres rurales y campesinas prevalezcan sobre los intereses lucrativos de terceros, involucrados en megaproyectos agrícolas y mineros, lo que ha llevado a que las mujeres campesinas tengan escasas oportunidades en el mercado laboral, siendo más probable que se dediquen a actividades no reguladas por derecho laboral y, por tanto, estando expuestas a mayores riesgos.

-Que en la Colombia rural persisten altas tasas de analfabetismo debido al precario acceso a la educación. De acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agropecuario (2014), se evidencia que 12,8 % de las mujeres mayores de 15 años en área rural dispersa no saben leer ni escribir. Quienes han logrado acceder al sistema educativo tienen en promedio

6,9 años de educación y el motivo de deserción escolar en la mayoría de los casos se debe a compromisos relacionados con el cuidado en el hogar. Lo anterior agrega barreras hacia el futuro para el desarrollo de proyectos productivos y la participación de las mujeres rurales.

-Que si bien se avanza en programas de fortalecimiento de capacidades productivas, muchas mujeres no logran acceder a ellos porque la educación a la que lograron acceder no les aportó los conocimientos que exigen estos procesos (analfabetismo). La educación de las niñas, jóvenes y mujeres rurales en términos de disponibilidad reproduce estereotipos patriarcales y de género que afectan los contenidos curriculares, la autonomía y los derechos de las niñas (Unión Europea; FAO; MinAgricultura, 2020).

En la actualidad la situación de las mujeres rurales no es muy diferente a la de décadas anteriores, incluso muchas carecen aún de documento de identidad razón por la cual no pueden ejercer ninguno de los derechos de ciudadanía consagrados en las leyes. Incluir a las mujeres rurales en aras de que puedan gozar plenamente de todos sus derechos, a formarse para que puedan mejorar sus condiciones de vida y aportarle a la lucha contra cualquier tipo de discriminación que hacia ellas pueda haber es un elemento esencial para el logro de la paz y el progreso del país.

2. 6 Mujeres rurales en el Valle del Cauca

De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia, el Valle del Cauca es el segundo departamento donde ha habido más feminicidios durante el 2020, después de Antioquia, con 31 casos. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de las mujeres, el Valle también fue el tercer departamento con incremento del número de llamadas de emergencia a la línea 155 durante los meses de confinamiento obligatorio decretados por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Así mismo, los datos procesados por el Observatorio de Género del Valle del Cauca—OGEN, reportaron que durante el año hubo en el departamento un total de 10.067 casos catalogados como “Otros delitos contra las mujeres”, entre violencia doméstica (5.291), delitos sexuales (2.268) y lesiones personales (2.508). Encabezan la lista, Cali con 50 casos, Palmira con 8 casos, Buenaventura y Tuluá con 6 casos cada uno, y Jamundí con 4 casos. Las cifras presentadas por el observatorio no contemplan posibles situaciones de violencias de género en el contexto rural.

Los delitos sexuales en el Valle del Cauca contra las mujeres y las niñas están muy ligados al devenir del tráfico y microtráfico, manteniéndose como un detonante permanente de

exacerbación de este delito en los cuerpos y vida de las mujeres vallecaucanas. Las mujeres jóvenes son el principal grupo poblacional afectado por las diversas formas de violencias y son quienes mayoritariamente están muriendo por estos hechos en el valle del Cauca. Los delitos sexuales contra las mujeres y las niñas en el Valle del Cauca tienen una carga muy grande sobre las niñas, puesto que el 65 % de estos se realiza contra menores de 14 años. Además el 43 % de estos se presentaron en vía pública comprometiendo a la seguridad de Municipios como Cali y Palmira, demostrando que las ciudades no son amigables con las mujeres y especialmente con las niñas (Ruta pacífica de mujeres, 2019).

Del mismo modo, se evidenció un incremento considerable en casos de violencia intrafamiliar en los municipios de Candelaria, Yumbo, Dagua y Cali. Aunque comparativamente con el año 2019, dicho observatorio reporta reducción en todos los casos, las cifras de violencias contra las mujeres en el departamento siguen siendo alarmantes y las afectaciones de dichas violencias para la vida de las mujeres múltiples y duraderas (secuelas físicas y psicológicas, restricción del uso del espacio público, violencia al interior de los hogares, afectación a niños y niñas, miedo a denunciar, entre otros).

Según la proyecciones de población 2018 – 2023 del DANE, en el Valle del Cauca, la población rural es de 666.412 personas, que representa un 5,57% de la población rural nacional. Valle del Cauca, figura como el tercer departamento con mayor brecha de déficit habitacional según sexo del jefe de hogar (porcentaje) - Total centros poblados y rural disperso 2018: Jefatura masculina 80,09%, Jefatura femenina 84,89%, Brecha M – H (puntos porcentuales) 4,80. Este déficit, es particularmente preocupante si consideramos el hacinamiento como una de sus dimensiones y la que más predispone a mujeres y niñas a vivir situaciones de violencia sexual.

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Ruta pacífica de mujeres, “Construyendo paz territorial Para las mujeres y niñas Vallecaucanas” (2019):

- Del Total Mujeres Vallecaucanas, 2.478.756, representadas en un 51.6%, 238.201 mujeres y 65.676 niñas, se encuentran ubicadas en zona rural. Allí la cobertura en educación es del 79.07% , está por debajo de la nacional; El analfabetismo es de un 3.51% y la Mortalidad materna de un 27.11%.

- Los hogares con jefatura femenina del departamento son un 39.5%, 41.3% en el área urbana y un 25.7% en el área rural. Esto está relacionado con fenómenos como la existencia de hogares monoparentales en los que la responsabilidad económica es asumida por las mujeres.

- Hay una brecha de género en el número de personas en situación de pobreza extrema en el departamento, ya que mientras el 18.5% son hombres, el 24.23% son mujeres. Es entonces

un porcentaje alto de mujeres que se enfrentan a carencias en los ámbitos de la salud, la educación, el nivel de vida, y la posibilidad de consumir alimentos diariamente.

En Nivel de Garantía del Derecho a una vida libre de violencias, el departamento se encuentra 50.7% por encima de la nacional, y manteniendo la tendencia a nivel nacional y regional. Son las mujeres del departamento las más afectadas por las violencias de género, particularmente perpetradas por las parejas sentimentales, es decir, principalmente por los hombres.

-El Valle ha logrado garantizar los derechos en el territorio rural y urbano pero pese a ello aún subsisten brechas. Mientras los porcentajes de acceso a servicios públicos y derechos se encuentran altamente garantizados para quienes viven en las ciudades, en general, los indicadores sociales y económicos evidencian que aún persisten brechas significativas de género y entre el campo y la ciudad. El reto es lograr equiparar estos niveles de cobertura a las comunidades que viven en el campo y de manera particular con las mujeres rurales quienes presentan mayores niveles de incumplimiento de sus derechos como ciudadanas.

Valle tiene 3 municipios PDET (priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional), 15 municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), los cuales no han logrado un mayor avance en el proceso de desarrollo de los proyectos concertados con las comunidades. Actualmente solo tiene 4 de los 40 consejos municipales de paz creados y en funcionamiento, así como como el consejo departamental de paz, la casa de la verdad y enlaces de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Todo lo anterior abre posibilidades para avanzar en el ejercicio de construcción de paz en la región, incentivando la mejora de las condiciones de vida de los municipios PDET, y ZOMAC y el acompañamiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJR) en la región.

2.7 Mujeres Municipio Santiago de Cali

A nivel nacional la ciudad de Cali es la tercera más importante después de Medellín, con base en su población y sus indicadores económicos, que lo posicionan como el principal centro industrial, comercial y financiero de la región. Es también el área donde se concentra una tercera parte del total de la población al ser el principal destino de las migraciones de todo el suroccidente colombiano (Jeanny Posso, 2004).


Aproximadamente un 27,5% de la población caleña es afrocolombiana, más de 540.000 personas, de las cuales el 43% son inmigrantes de diferentes orígenes. Así lo confirman los

Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, para Cali, Valle del Cauca llevado a cabo por el DANE (2019):

INFORMACIÓN PARA TODOS

5. Principales orígenes de los inmigrantes internos

Divipola	Municipio	Inmigrantes 1 año
76109	BUENAVENTURA	1.097
76520	PALMIRA	691
76364	JAMUNDI	648
76834	TULUA	413
76892	YUMBO	292
76126	CALIMA	269
76111	BUGA	223
76130	CANDELARIA	219
76233	DAGUA	209
76147	CARTAGO	173



Divipola	Municipio	Inmigrantes 5 años
76109	BUENAVENTURA	5.218
76520	PALMIRA	2.657
76834	TULUA	1.940
76126	CALIMA	1.829
76364	JAMUNDI	1.775
76892	YUMBO	1.228
76111	BUGA	938
76233	DAGUA	741
76130	CANDELARIA	684
76147	CARTAGO	569

Imagen 1 - Resumen de la migración interna (intradepartamental) entre Valle del Cauca y Cali. DANE 2019

En el espacio urbano de Cali se producen fenómenos de segmentación y segregación que afectan especialmente a la población negra y mulata (Barbary, Citado por Jeanny Posso), así como a la población indígena proveniente del departamento del Cauca. Muchas de estas mujeres se encuentran con la precarización laboral que les genera su vinculación a puestos de trabajo en servicios generales, principalmente como trabajadoras domésticas.

Hoy catalogada como Distrito Especial, Cali cuenta con una zona rural compuesta por 15 corregimientos (Navarro, El Hormiguero, Pance, La Buitrera, Villacarmelo, Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia, El Saladito, La Elvira, La Castilla, La Paz, Montebello, Golondrinas), en los que hay gran potencial de género por lo menos de 15 mil mujeres según datos de Cali en cifras 2018. De acuerdo con este mismo informe, la distribución de viviendas según estrato evidencia que la mayoría se encuentran catalogadas dentro del estrato 1 y 2.

En relación con el número de casos de feminicidios ocurridos en 2019, este año los casos se duplicaron -entre enero y el 22 de octubre de 2020 hubo 20 feminicidios en el municipio-. Además se otorgaron 5.660 medidas de protección a personas víctimas de violencia intrafamiliar por parte de las comisarías de familia. El 44% de esas medidas de protección respondieron a denuncias por violencia de género, es decir hacia las mujeres y al interior de sus hogares. De acuerdo con la Subsecretaría de Equidad de Género, en el informe presentado ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Concejo

Municipal de Santiago de Cali, durante el año 2019 se atendieron 875 casos de mujeres víctimas de violencias basadas en género en el municipio de Cali y 42 de esas denuncias se dieron por parte de mujeres de las zonas rurales, siendo Montebello, Pila de cabuyal y Pueblito Pance los corregimientos con mayor prevalencia de casos de violencias de género. Hasta enero de 2020 se habían reportado 55 casos, ninguno en la zona rural.

De acuerdo con la caracterización hecha para la Política pública para las mujeres caleñas (2009-2020) hay más mujeres que hombres analfabetas en Cali. Los indicadores de desarrollo humano de las mujeres caleñas señalan que las mujeres con jefatura de hogar presentan el índice más alto de analfabetismo lo cual disminuye las posibilidades de mejores vinculaciones laborales, lo que incide en sus ingresos y en la calidad de su vida (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008:7); 79.382 hombres frente a 85,131 mujeres jefas de hogar, que no saben leer ni escribir en el municipio de Santiago de Cali.

El censo General de 2005 llevado a cabo por el DANE, señala que más mujeres han alcanzado mejores niveles educativos que los hombres, con excepción de la preescolar y media técnica, donde hay más hombres que mujeres. Una posible explicación a este dato es que hay más oferta de educación técnica para hombres y además habría que relacionarlo con la tasa de empleo de las mujeres, la cual es más baja para ellas que para los hombres y obliga a la política a plantear respuestas de formación para las mujeres desde la educación media en oficios competitivos laboralmente.

Las condiciones de equidad económica de las mujeres caleñas se expresan en la comparación entre los niveles educativos alcanzados por las mujeres y su inserción en el mercado laboral. Frente a esto vale la pena señalar que las mujeres reportan 10.4 años promedio de escolaridad, con una ligera diferencia con relación a los varones, quienes tienen 10.1 años promedio (PNUD- Colombia, 2008).

La distribución de las tasas de desempleo de acuerdo con los niveles educativos alcanzados muestra que las mujeres tienen más posibilidades de empleo que los varones, cuando alcanzan la secundaria completa (22.6%) o cuando tienen formación tecnológica (9.9%). Estos indicadores sugieren que la política pública para mujeres recomienda y plantea estrategias que garanticen una mayor equidad en la oferta educativa para el trabajo y en la distribución del empleo (DANE, 2005)

La rama de servicios comunales, sociales y personales continúa siendo la principal fuente de empleo femenino con 35,1% de mujeres ocupadas en el total nacional, y 34,8% en las trece cabeceras y sus áreas metropolitanas que incluye la Encuesta; estos datos sugieren que en la población femenina caleña frente al mercado laboral hay menor porcentaje de mujeres empleadas frente a la población masculina (Política pública para las mujeres caleñas, 2009-2020).

Este dato es preocupante porque las mujeres tienen menos posibilidades de vinculación laboral, adicionalmente las barreras para ellas son mayores cuando deben además dedicarle tiempo a la crianza de los hijos (as). La jefatura femenina, es una problemática trazadora para la intervención institucional fundamentada en la equidad de género. De 544.793 hogares registrados en el municipio de Santiago de Cali, el 33,8% son jefeados por mujeres y 66,2% por hombres. El problema lo constituyen las condiciones en que las mujeres ejercen este rol, casi siempre solas, en trabajos mal remunerados y de baja calidad que no garantizan el ejercicio de sus derechos laborales.

3. Necesidades: formación para empoderar a las mujeres rurales

De acuerdo con la Confluencia de Redes de Mujeres – Colombia, que realizó el informe “La Política Pública para las Mujeres en Colombia: Alcances y límites de la acción de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM)” en materia de implementación de la política pública para las mujeres en Colombia, el alcance de la política pública para las mujeres en el país está limitado por la focalización de programas de carácter asistencial en mujeres de más bajos recursos, y “vulnerabilidad selectiva” desde el punto de vista de generación de ingresos. Esto porque no busca eliminar la discriminación y construir relaciones de igualdad entre los sexos, porque no cumple el espíritu de la ley de incidir en la realización de derechos de las mujeres de manera integral y desde un enfoque de derechos, sino que se ha caracterizado por la realización de acciones de bajo impacto, en la inversión y en el número de beneficiarias; por la desarticulación de estas acciones con la política general del gobierno, por la realización de acciones que refuerzan roles y/o percepciones sociales tradicionales sobre el papel de las mujeres en la sociedad, por la no rendición de cuentas y por la ausencia de diálogo con interlocutoras válidas con las que cuenta el movimiento de mujeres en el país.

En dicho informe se observa también que en el seguimiento a través de su Observatorio de Asuntos de Género a los diferentes programas que se ejecutan como parte de la política pública para las mujeres en el país, la información está centrada en el número de beneficiarias pero no en acciones para garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres ni en su nivel de incidencia real y a lo largo del tiempo. Por otra parte, asegura la confluencia de mujeres, que ha habido una marcada ausencia de un enfoque de derechos y de reconocimientos de las especificidades de las mujeres colombianas, pues la política pública presenta ausencias en propiciar la autonomía económica vía la consecución de empleo, en condiciones de dignidad y respeto de los derechos laborales de las mujeres -es decir desde un enfoque de derechos-, puesto que está centrada sólo en el fomento de la microempresa.

Además, el centro del accionar de la política pública está en el área de Empleo y desarrollo empresarial, particularmente en el programa de microempresarias, pero la acción no hace

parte de la política de empleo del gobierno nacional y su impacto ha sido reducido pues además de que son pocas las mujeres beneficiarias de los créditos, se las sigue vinculando a ocupaciones estereotipadas y ligadas a su trabajo reproductivo no remunerado y sin transformar de fondo en sus comunidades y familias, esos imaginarios que llevan a que las mujeres rurales tengan que experimentar una sobrecarga de trabajo.

Si no se cuestiona ni modifica la división de trabajo, las tareas y las responsabilidades, el tiempo invertido, ni se reconoce la remuneración y el valor económico y social del trabajo reproductivo entre hombres y mujeres, la situación de las mujeres nunca cambiará de manera significativa en el mundo (Fries et al., 2010, citado por Oxfam, 2014). Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres rurales es invertir también en el mejoramiento de la calidad de vida de sus hijos e hijas, pues hay evidencia que enseña que las mujeres tienden a invertir de mejor manera sus rentas, dedicando más recursos a la salud y al capital humano que sus pares varones, generando externalidades positivas para toda la sociedad (Botello & Guerrero, 2017).

Reducir las brechas de género existentes para las mujeres rurales pasa necesariamente por visibilizar el trabajo que ellas ya realizan, y los conocimientos a asociados a esos trabajos, además de ampliar sus posibilidades de elección sobre qué y cómo hacer y la apropiación de los resultados. Aquí, será el enfoque de género el que permita reconocer los trabajos que las mujeres ya realizan, en qué espacios se dan, cuánto tiempo dedican a ellos, así como los conocimientos que implican.

Sin embargo, es fundamental reconocer también que existen ciertas necesidades concretas de las mujeres rurales en su trabajo productivo que se derivan de varias situaciones que llevan a que la gran mayoría de ellas tengan escasas oportunidades en el mercado laboral, siendo más probable que se dediquen a actividades no reguladas por derecho laboral, o sea al trabajo informal, y, por tanto, estén expuestas a mayores riesgos y vulnerabilidades.

Una de esas situaciones es que la mayoría del empleo rural en el país es agropecuario y se caracteriza por ser temporal y estacionario según el ciclo productivo. Así lo confirma el Primer informe sombra específico de Mujeres Rurales y Campesinas en Colombia (2019), cuando advierte que no existen estrategias ni medidas legislativas que permitan a las mujeres rurales tener cobertura en seguridad social, excepto a través de la agroindustria, ignorando el valor del trabajo remunerado en actividades de agricultura familiar, campesina y comunitaria, caza, ganadería, silvicultura, pesca y otras ramas que dinamizan la economía rural, a las que se dedican el 40,7% de las mujeres rurales. Además, Solo el 14,7% de la población rural cotiza al sistema general de seguridad social y se observa que mientras el 15,7% de los hombres cotiza al sistema pensional, solo un 12,0% de las mujeres rurales lo

hacen (Unión Europea; FAO; MinAgricultura, 2020)³. Las políticas que faciliten el acceso universal a la protección social, en especial frente a riesgos laborales y protección ante la volatilidad en los ingresos por situaciones de enfermedad, discapacidad o maternidad, son casi inexistentes en el campo... El trabajo formal es, de hecho, el mejor generador de ingresos y de protección social en las zonas rurales, pero su alcance es muy limitado. (DNP, 2016).

Así lo corrobora también la OIT (2012a), cuando afirma que la economía rural, que engloba a cerca del 80% de los trabajadores pobres del mundo, se caracteriza por graves déficits de trabajo decente. En este mismo sentido plantea la FAO (2011), que a menudo, los trabajadores rurales son vulnerables porque no pueden ejercer o hacer valer sus derechos. Las bajas tasas de participación de las mujeres rurales en la fuerza laboral y la discriminación afectan de forma importante la productividad agrícola: se estima que si la mujer tuviera el mismo acceso a los recursos productivos que el hombre, la producción agrícola de los países en desarrollo podría aumentar entre el 2,5 y el 4%, lo que a su vez permitiría reducir el número de personas hambrientas en el mundo entre un 12 y un 17%. (Citados en OIT, 2016)

Una segunda situación que influye en la baja participación femenina en el trabajo rural remunerado, está relacionada con el analfabetismo y el rol de cuidadoras de las mujeres rurales. De acuerdo con la Tercer Censo Nacional Agropecuario del 2014, se evidencia que 12,8 % de las mujeres mayores de 15 años en área rural dispersa no saben leer ni escribir, quienes han logrado acceder al sistema educativo tienen en promedio 6,9 años de educación y el motivo de deserción escolar en la mayoría de los casos se debe a compromisos relacionados con el cuidado en el hogar (Informe Sombra, 2019). En particular, la participación femenina, a mayor número de hijos en el hogar, tiende a decrecer. En el caso de las mujeres que habitan en la zona rural, aquellas que integran hogares que no cuentan con menores de 6 años de edad tienen una participación del 41,5%; en la medida en que aumenta el número de menores, la participación de la mujer disminuye (Unión Europea; FAO; MinAgricultura, 2020). Contribuye con esta situación, la baja cobertura institucional de las unidades de servicio de guardería y jardines infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) alrededor del país, y de manera específica en la ruralidad dispersa, implica para las mujeres rurales continuar al cuidado de menores de 5 años y de personas enfermas sin mayor remuneración, con un desgaste significativo para su salud física y mental que no se considera como un riesgo laboral (Informe Sombra, 2019).

³De acuerdo con la OIT (2016), 27 millones de trabajadores en zonas rurales se encuentran en situación de empleo vulnerable. Las zonas rurales presentan grandes rezagos respecto a las áreas urbanas: un 46% de pobreza frente a un 23% en las ciudades, graves déficit de trabajo decente en términos de subempleo, bajos ingresos, limitada cobertura de la seguridad social, alta informalidad, altos niveles de trabajo infantil y con frecuencia también de trabajo forzoso, bajas tasas de participación de las mujeres.

Luego nos encontramos con que una consecuencia de la informalidad y la baja tasa de participación laboral, de sus bajos ingresos, de las dificultades en términos de la formalidad y al acceso a activos, es que también se afecta la posibilidad de que las mujeres accedan a créditos. De hecho, en Colombia una de las principales barreras que reportan las mujeres para acceder a instrumentos crediticios es la falta de propiedad sobre la tierra (Ramírez et al. 2015). Por tanto, los derechos de propiedad (tierras, activos y ahorros) son fundamentales para lograr la equidad de género en la distribución de la riqueza y el acceso a fuentes de financiamiento (Deere et al. 2012). (Unión Europea; FAO; MinAgricultura, 2020).

No es de extrañar entonces, que diferentes autores (FAO 2005b y 2004, León 2009, Abramo 2006, Ruiz Bravo 2004, Prieto et al 2006, Cárdenas et al 2010, Manuela Ramos e INEI 2010) coincidan en que la participación sostenida de las mujeres rurales en el ámbito laboral fomenta su empoderamiento y autonomía, además de constituir una estrategia para superar la pobreza. Sin embargo, se reconoce también que la participación en sí misma no asegura la igualdad de condiciones entre los hombres y mujeres que trabajan, por lo que es importante revisar las condiciones de inserción y permanencia en el mercado laboral desde un enfoque de género.

Invertir en educación no solo mejora las competencias técnicas, sociales y la productividad laboral de una persona, sino que también aumenta la probabilidad de conseguir un empleo, obtener ingresos más altos y mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables (Becker 1995; CEPAL 2006). La educación y la capacitación son herramientas poderosas contra la pobreza y el hambre, y favorecen el empoderamiento femenino. Las mujeres que han recibido educación tienen mayores probabilidades de ser más sanas, recibir ingresos más altos y ejercer un mayor poder de decisión dentro del hogar. Además, cuando las mujeres reciben los mismos niveles de educación, experiencia e insumos agrícolas que los hombres, no hay diferencias significativas entre la productividad de los agricultores de uno y otro sexo; las mujeres rurales que han recibido educación tienen menos hijos y son más propensas a enviarlos al colegio, elevando de esta forma la productividad de las generaciones futuras, incrementando sus ingresos y generando así crecimiento sostenible. La educación y la capacitación son componentes esenciales dentro de cualquier estrategia para mejorar la productividad agrícola y no agrícola, y sacar a los hogares de la pobreza. Aprender acerca de tecnologías y métodos de producción mejorados, nuevos productos y mercados, y habilidades de negocios y de vida (tal como la gestión de la salud, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo o el manejo de conflictos) puede llevar al empoderamiento de las mujeres y de sus comunidades. Igualmente, la existencia de cursos móviles que acerquen la formación profesional a las comunidades es una solución para zonas remotas y beneficia especialmente a las mujeres que suelen tener mayor restricción en la movilidad por razones de seguridad y limitaciones de tiempo (OIT, 2016).

Finalmente, nos encontramos con que actualmente el Plan Especial de Educación Rural, que hace parte del conjunto de estrategias que deben responder a los retos de la educación de manera directa en el marco del Acuerdo Final y en beneficio de la consolidación de la cobertura y la calidad educativa en las zonas rurales, no ha sido implementado por falta de financiación. “Si bien establece un gran plan educativo para zonas rurales priorizadas en los PDET, dicho plan no cuenta con enfoques diferenciales para la atención de niñas y mujeres jóvenes ni hace referencia alguna a confrontar y erradicar los estereotipos patriarcales y de género que afectan a las niñas” (Primer Informe Sombra específico de Mujeres Rurales y Campesinas en Colombia, 2019).

3.1 Enfoques del programa.

-Enfoque de derecho: Hace énfasis en el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano y establece la política social como un derecho social. Este enfoque está conectado íntimamente con los Derechos Humanos y sus bases. Cuando sus actores sociales se comprometen activamente, demandan sus garantías y construyen cambio, así como también la comunidad política, para garantizar a la ciudadanía fundada en los derechos, la solidaridad y la justicia⁴ Dentro del programa implica reconocer a las mujeres rurales como sujetas de derechos que en el ejercicio de su condición de ciudadanas intervienen en su desarrollo socioeconómico, a través de la participación y formación.

-Enfoque diferencial: Puede entenderse como el conjunto de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales.

En un Estado Social de Derecho, toda persona es igual ante la ley. Por tanto, la igualdad debe traducirse en el trato idéntico del Estado para todos y todas, y en este sentido se reconocen derechos iguales para todas las personas. Sin embargo, dado que solo se puede dar un trato igual entre iguales, se justifica un trato diferente para quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, con el fin de lograr efectivamente la igualdad. Se hace necesario entonces implementar acciones diferenciales acordes con las necesidades, diferencias y desigualdades de las personas. Son sujetos del enfoque diferencial los grupos de especial protección por su ciclo vital, discapacidad, pertenencia étnica o su condición de género⁵.

⁴ Naciones Unidas (2006). Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo.

⁵ República de Colombia, Ministerio del Interior

-Enfoque de género: Busca una transformación social de fondo para el logro de la equidad, donde hombres y mujeres tengan la libertad de ejercer sus derechos y de construir contextos para el reconocimiento de las desigualdades, acogidos a los marcos normativos, políticos y socioculturales que han evolucionado en materia de reconocimiento de derechos. Esto en la vía de desnaturalizar prácticas asociadas al sistema patriarcal y al machismo que se evidencia históricamente en la situación de violencia, sometimiento, desventaja y precariedad en la que han vivido las mujeres. Siendo así, el programa pretende visibilizar el modo en que género puede afectar la vida y las oportunidades de las mujeres rurales para resolver sus problemas y dificultades en torno al factor socioeconómico.⁶

3.2 Conceptos del programa.

- *Mujer rural.* Es toda aquella que sin distinción de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada⁷.

- *Empoderamiento socioeconómico.* Es el proceso en que se desafían las relaciones de poder existentes para obtener un mayor control sobre las fuentes de poder. A su vez implica que el sujeto se convierte en agente activo y particularmente para las mujeres, se presenta cuando pueden ejercer su derecho a controlar y beneficiarse de los recursos, bienes e ingresos, así como a disponer de su propio tiempo, y cuando tienen la capacidad de gestionar los riesgos y de mejorar su situación económica y su bienestar. Esto a su vez va más allá de su autonomía económica, ya que se trata de un concepto que define la totalidad del proceso encaminado hacia la realización de un conjunto más amplio de derechos políticos, económicos y sociales y culturales⁸.

- *Brechas de género:* Es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador como la diferencia de oportunidades al acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros.⁹

- *Estereotipos de género:* Es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer y de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar generando violaciones de los derechos y las

⁶ Méndez, I. L. (2007). El enfoque de género en la intervención social. Cruz Roja Española.

⁷ LEY 731 DE 2002 de 16 de enero de 2002, Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.

⁸ Pérez, Á. M. D., & Niño, A. C. S. (2019). Modelo de Empoderamiento Socioeconómico con enfoque de Género: La experiencia de Corambiente con mujeres rurales en Santander. *Reflexión política*, 21(42), 9. Marco conceptual de Oxfam sobre el empoderamiento socioeconómico de las mujeres.

⁹ Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe Lima: “Brechas de género”

libertades fundamentales. Del mismo modo, limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales y tomar decisiones acerca de sus proyectos vitales.¹⁰

4. Marco Normativo

4.1 MARCO LEGAL INTERNACIONAL

Colombia ha ratificado su compromiso en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, mediante la firma de diferentes normativas internacionales que han sido incorporadas al marco legal nacional, con el fin de que las mujeres puedan gozar plenamente como sujetos políticos que son, de sus Derechos Humanos. Particularmente, frente al tema de su educación en todas estas normas internacionales se menciona la necesidad de que las mujeres, específicamente las mujeres rurales, se incorporen a procesos de capacitación que les permitan mejorar su calidad de vida, que les posibiliten el empoderamiento y la autonomía económica, la soberanía alimentaria, entre otros, que a su vez se verán reflejados en el mejoramiento de las condiciones de sus hijos e hijas y sus comunidades.

En el marco legal internacional, hacen alusión específica de las mujeres rurales y/o a su educación las siguientes: La CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979), la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995), la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2013 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979) : Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer teniendo en cuenta los problemas especiales que hace frente la mujer rural, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación aportando así la consolidación de diferentes medias estipulados en diferentes artículos basados en la educación y alfabetización para las mujeres rurales en donde se presentan estrategias como las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, la oportunidad de tener los mismos programas de estudio y los accesos a becas.

La Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995): Frente a la situación de pobreza y vulnerabilidad que vivencian las mujeres rurales, se plantean diferentes medidas bajo las siguientes esferas: dentro del plan de desarrollo económico se focaliza la promoción de la independencia económica de las mujeres, el diseño de planes para el desarrollo sostenible bajo la garantía de que se realizarán programas de divulgación para informar a las mujeres de bajos ingresos y a las mujeres pobres, especialmente en las zonas rurales y apartadas. En referencia a la educación, esta es tomada como una manera vital para el crecimiento

¹⁰ ACNUDH: Los estereotipos de género y su utilización

económico sostenido, por lo que la alfabetización y la capacitación de las mujeres rurales mediante el uso de tecnologías accesibles y apropiadas y de los medios de comunicación, es fundamental. Finalmente, se habla de adoptar medidas para integrar una perspectiva de género anclada a las anteriores dimensiones.

La Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Asamblea General de la Naciones Unidas de 2013: El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, considera que los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere medidas especiales para garantizar que los Estados respeten, protejan y hagan cumplir sus derechos humanos, dentro de los artículos constituidos se encuentra que los campesinos tienen derecho a disfrutar plenamente, a título individual y colectivo, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, a su vez estos tienen el derecho a la educación y la formación bajo la mirada de un nivel de vida digno.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): En aras de tomar medidas frente a la pobreza y la desigualdad de género; y con la misión de construir equidad a través de la educación, dentro de los Objetivos de desarrollo sostenible se plantean como objetivos de desarrollo sostenible diferentes garantías como la movilización de recursos, la creación de marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género y una educación inclusiva, equitativa y de calidad. **Objetivo No. 5.** Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. **Objetivo No. 10.** Para frenar este aumento de las desigualdades, es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza o etnia.

4.2 MARCO JURÍDICO NACIONAL

Dentro del marco legal nacional se encuentran varias normas que se refieren a la situación de la mujer rural. La ley general de educación - Ley 115 del 8 de febrero de 1994, la Ley 581 del 31 de mayo 2000, la Ley 731 DE 2002 de 16 de enero de 2002, Ley 1413 de 2010, Ley 160 de 1994 y la Ley 1876 de 2017. A nivel del Departamento se encuentra la Ordenanza 317 de diciembre del 2010 y en cuanto al Municipio está la Política pública para las mujeres caleñas 2009-2020.

LEY 115 DE 1994 de 8 de febrero de 1994, por la cual se expide La ley general de educación: Dentro de esta ley se encuentran diversos artículos enunciados desde la importancia de la educación para los campesinos, se estipulan medidas como los proyectos institucionales de educación campesina, el servicio social en educación campesina y las granjas integrales en donde los educandos puedan desarrollar prácticas agropecuarias y de

economía solidaria o asociativa que mejoren su nivel alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la autosuficiencia del establecimiento.

LEY 581 DE 2000 de 31 de mayo 2000: Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones, dentro de estas se encuentran diferentes artículos en torno al desarrollo de la mujer como la atención especial a los programas de alfabetización dirigidos a la población femenina, la promoción de educación en igualdad de sexos y promoción de los valores de la mujer, acciones positivas orientadas a la comprensión y superación de los obstáculos que dificultan la participación de la mujer en los niveles de decisión del sector privado y capacitación especializada de la mujer en el desarrollo del liderazgo con responsabilidad social y dimensión del género.

LEY 731 DE 2002 de 16 de enero de 2002, Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales: Dicha ley define que una mujer rural es toda aquella que sin distinción de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada. La Ley 731 de 2002 decreta normas en pos de favorecer a las mujeres rurales, en las que se resaltan acciones fundamentales como la educación y formación para el desarrollo donde especifica que los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad rural, deberán apoyar eficazmente el acceso de las mujeres rurales a los recursos, a través de medios idóneos que permitan su divulgación, la capacitación adecuada para su utilización y la asistencia técnica de los proyectos productivos que se emprendan. El Gobierno Nacional también deberá emitir cartillas, folletos y otros medios de comunicación de carácter didáctico, destinados a divulgar ampliamente esta ley y otras que benefician a la mujer rural. Así mismo, los gobiernos departamental, distrital y municipal deberán formular y llevar a cabo planes específicos de igualdad de oportunidades, promoción y estímulo para las mujeres rurales, para lo cual tendrán en cuenta la opinión de las organizaciones que las agrupan.

Ley 1413 de 2010 “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.”: Esta ley tiene por objeto incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Señala que se deberán establecer los mecanismos y realizar las gestiones necesarias para planear, diseñar, aplicar y actualizar la forma de inclusión de la información sobre trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Ley 160 de 1994 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.”: Esta ley se encuentra inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Dicha ley específica como fundamental la promoción y coordinación en el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento y la garantía de mejorar las condiciones y oportunidades de participación equitativa en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, propiciando la concertación necesaria para lograr el bienestar y efectiva vinculación al desarrollo de la las mujer campesina e indígena.

Ley 1876 de 2017 “Por medio de la cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones”: Esta ley estipula tiene por objeto la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), en donde se encuentran diversas estrategias que deberán ser implementadas para el desarrollo de los campesinos y la zona rural, dentro de las cuales se destacan la generación de estrategias para la planificación, implementación, evaluación y seguimiento de la política de extensión agropecuaria y mecanismos para su financiación, la búsqueda de alternativas que garanticen la participación real de las mujeres y jóvenes rurales en los procesos y herramientas ofrecidas por el SNIA y la promoción del desarrollo empresarial, de las organizaciones de segundo piso, y la conformación de redes de productores, mujeres y jóvenes rurales.

DECRETO 902 DEL 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”: se crea este decreto a favor de mejorar la falta de oportunidades económicas en las áreas rurales, se espera del mismo modo el reconocimiento de la economía del cuidado en todos los procesos de acceso y formalización de tierras como actividades de aprovechamiento de los predios rurales, a efectos de la configuración de los hechos positivos constitutivos de ocupación o posesión. y especialmente para la formulación de los proyectos productivos en los programas de acceso a tierras, las actividades adelantadas por las mujeres bajo la denominación de economía del cuidado conforme a lo previsto por la Ley 1413 de 2010.

4.3 Nivel departamental:

ORDENANZA 317 DE DICIEMBRE DEL 2010: “Por medio del cual se adopta la política pública para las mujeres vallecaucanas”: Dentro de este decreto se encuentran

diversas estrategias para las mujeres del Valle como la incorporación de enfoque de género en el desarrollo hacia el mercado laboral, la importancia de la formación continua, integral y organizada para las mujeres, el reconocimiento y certificación de sus saberes, la estructuración de programas de capacitación y formación, la promoción de programas de alfabetización y postalfabetización mujeres rurales y la formación con equidad de género.

4.4 Nivel Municipal:

Política pública para las mujeres caleñas: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades (2009-2020): Dicha política se fundamenta en la perspectiva de género basada en los principios de equidad y justicia para las mujeres. Dentro de los lineamientos que se establece la necesidad de fomentar el desarrollo económico, género, educación, y específicamente para las mujeres rurales se tienen en cuenta la creación de estrategias para la motivación y estímulo que permita a todas las mujeres que lo requieran, terminar los diferentes ciclos educativos mediante la ampliación, estímulo y apoyo a las mujeres en cualquier condición de vulnerabilidad, para el acceso a la educación superior, técnica y tecnológica, la Realización de programas de divulgación y de formación sobre derechos económicos, la ampliación de mercados y canales de comercialización para mujeres empresarias a través de la creación de centros de tecnologías de información y comunicación y capacitación en esta tecnología a las mujeres, considerando sus condiciones específicas y la inclusión de las mujeres rurales en todos los procesos de asistencia técnica y empresarial orientados al sector rural la capacitación a las mujeres rurales para la transformación de productos agropecuarios, clasificación y selección de calidades, acceso a la información de precios y mercados terminales y elaboración de proyectos productivos sostenibles.

4.5 MARCO JURISPRUDENCIAL

Dentro del marco jurisprudencial se encuentran varias normas que se refieren a la situación de la mujer rural como lo son: CONPES social del 91 (2001), Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la Sentencia C-077/17 y la Sentencia 650 de 2012.

CONPES social del 91 (2001): Normativa creada frente al contexto que presenta la zona rural en nuestro país, busca que para el sector rural se fortalezca la adecuación de los diseños estratégicos y la orientación, en proporciones adecuadas, de parte de las transferencias a las zonas rurales con mayor deficiencia de coberturas. Se establece una asistencia técnica adecuada para los acueductos rurales en términos de suministros, obras y capacitación. Así mismo, la mejora de los sistemas de información para la zona rural, incentivar la participación ciudadana e implementar el manejo de tecnologías aplicables al contexto rural. En cuanto a la educación en términos generales se espera implementar estrategias y escenarios para promover la convivencia y la educación para la paz desde el

aula, la escuela y la comunidad educativa y se asegura que los lineamientos del Plan Nacional de Alfabetización deben estar recogidos en los planes educativos territoriales.

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera: Una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra teniendo en cuenta aspectos como el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo mediante el programa de desarrollo y educación donde se busca un incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, el acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales -hombres y mujeres, la promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas y la incorporación de la equidad de género en todo lo mencionado con anterioridad. Dichas estrategias estarán apoyadas en proyectos productivos sostenibles y con enfoque de género, el acompañamiento y asesoría integral y diferentes programas de formación para mujeres rurales multiplicadoras.

Sentencia 650 de 2012 Consejo de Estado: Se crea a modo de hacer visible la falta de oportunidades de las mujeres rurales y la poca continuidad en los procesos y leyes donde se ordena a la autoridad renuente, en este caso a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el cumplimiento inmediato de lo ordenado por el artículo 34 de la Ley 731 de 2002, de manera que se diseñe y ponga en marcha un plan de revisión, evaluación y seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales.

Sentencia C-077/17: Mediante la cual se estipulan normas de interés en desarrollo rural, económico y social- ZIDRES, donde se tienen en cuenta lineamientos como promover el acceso y la formalización de la propiedad de la tierra a los campesinos, a los trabajadores agrarios, mujeres rurales, jóvenes rurales y ocupantes tradicionales de bienes inmuebles de la nación, promover la inclusión social y productiva de campesinos, trabajadores agrarios, mujeres rurales y ocupantes tradicionales de bienes inmuebles de la nación como agentes sociales, productivos y emprendedores, implementar estímulos a la promoción, formación y capacitación de los campesinos, trabajadores agrarios y mujeres rurales e implementar las TIC con la enseñanza, como actividad de aprendizaje de valores y de reingeniería para técnicos, tecnólogos y profesionales del campo.

Proyecto de Ley 048 de 2019 “Por medio de la cual se consagran herramientas de promoción de los derechos de la educación rural y se dictan otras disposiciones”

Este proyecto de ley tiene por objeto mejorar las herramientas de promoción de los derechos de las mujeres rurales para garantizar el cierre de brechas de género y generar mejoras para su buen vivir. Dentro de este proyecto se prioriza la formación de las mujeres rurales como medida esencial para la continuidad y la promoción de sus derechos y se establece la necesidad de que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) apoye técnica y financieramente la implementación de los proyectos productivos en predios rurales, y garantice la participación de las mujeres rurales y sus organizaciones, en todas las etapas de desarrollo de los proyectos, a fin de que puedan fortalecer su autonomía económica en los territorios. Además, establece que dichos programas deben contar con asesoría permanente y acompañamiento integral, para que las mujeres rurales y en particular, las que han sido víctimas de violencias en su contra, puedan ejercer sus derechos de manera adecuada y permanente, al tiempo que deben contar con protocolos para reconocer y respetar los conocimientos y saberes propios de las mujeres rurales.

5. Coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2018-2020, el gobierno propuso la implementación de diferentes metas en relación a las posibilidades productivas, económicas y educativas que implican a la población rural en general y a las mujeres, éstas son: apoyar 550 mil productores con asistencia técnica agro y 300 mil con agricultura por contrato, crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo desde los noventa, lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet, y sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria.

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo consta de diferentes Pactos en los que se propone objetivos y estrategias para diferentes entes. Dentro de lo que concierne a la productividad y el crecimiento económico de la zona rural se encuentran varios Pactos como son: El Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad en su apartado (Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural), El Pacto por la equidad en su apartado (Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva) y el Pacto por la productividad y la equidad en las regiones en su apartado (Región pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible).

En cuanto a lo relacionado con la equidad de género y la educación desde la formación en herramientas virtuales, se encuentran los pactos transversales que son: Pacto de equidad para las mujeres y el Pacto por la formación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.

Dentro de lo que estipula el Plan Nacional de Desarrollo para la región pacífica son de resaltar los siguientes puntos que se encuentran en concordancia con el desarrollo

económico y formativo de la zona rural: potenciar el desarrollo productivo según las vocaciones propias de la región, mejorar la oferta de servicios logísticos para el desarrollo productivo y el desarrollo rural.

6. Coherencia con el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali Distrito Especial

Este proyecto de Acuerdo contribuye con al plan de Desarrollo Municipal vigente: Plan de Desarrollo 2020 – 2023 ‘Unidos por la Vida’, en varias de sus dimensiones:

-Dimensión 1: Revitalización socioproductiva. 104 línea Estratégica: Empleabilidad y Emprendimiento. 104001- Programa: Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género, que tiene por objetivo: Formar talento humano en competencias y habilidades que sean específicas de cada sector empresarial que fortalezcan la inserción y permanencia en el mercado de trabajo. El enfoque diferencial y de género busca garantizar el acceso universal al empleo, eliminando las barreras asociadas a atribuciones socio-culturales (sexo, género, orientación sexual, etnia, raza, ciclo vital y de personas en situación de discapacidad.)

Indicador de producto 1. Personas con formación técnica para la inserción laboral y el desarrollo humano con enfoque diferencial y de género – **Organismo responsable:** Secretaría de Desarrollo Económico

105 Línea Estratégica: Economía Solidaria y del Bien Colectivo. 105002- Programa: Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz, este programa busca desarrollar los principales ejes de la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Santiago de Cali (Acuerdo 0470 de 2019), dando respuesta a las necesidades alimentarias de la población para garantizar el acceso a una alimentación saludable y suficiente, articulando estrategias de producción agropecuaria y distribución de alimentos que sean económica y ambientalmente sostenibles.

Indicador de producto 5. Plan estratégico para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres de la ruralidad - **Organismo responsable:** Desarrollo Económico

-Dimensión 2. Protección solidaria de la vida. 203 Línea Estratégica: Territorios para la Vida. 203004 Programa: Seguridad y Soberanía Alimentaria que tiene por objetivo: el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas acordes a la crisis pandémica y post-COVID-19 y el fomento de la cultura campesina y rural, en articulación con la zona urbana, asegurando precios justos para los alimentos y promoviendo la consolidación de organizaciones de campesinos y habitantes rurales para el cuidado de la vida, la soberanía alimentaria y el bien común.

Indicador de producto 6. Familias de pequeños y medianos productores rurales y huerteros urbanos, con asistencia técnica para la producción agropecuaria con enfoque agroecológico, para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. **Organismo responsable:** Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA

-Dimensión 3. Territorio resiliente y sustentable.

302 Línea Estratégica: Mitigación del Cambio Climático. 302003 Programa: Producción y Consumo Responsable que está enfocado a brindar soluciones de producción limpia. Generando conciencia sobre diferentes opiniones que favorezcan la conservación de nuestro ecosistema, promoviendo el uso adecuado de los recursos naturales.

Indicador de producto 10. Mujeres beneficiadas con proyectos para la producción agroecológica y consumo responsable con enfoque diferencial y de género. **Organismo responsable:** Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA

301 Línea estratégica: Fortalecimiento y Gestión de los Socio-Ecosistemas. 301004 Programa. Ruralidad Sustentable que está orientado al desarrollo sustentable en la zona rural de Santiago de Cali. Las iniciativas planteadas en el programa apuntan al aprovechamiento responsable del patrimonio ambiental, procurando un equilibrio entre el habitante rural y su entorno, de manera que puedan desarrollarse actividades económicas que generen ingresos para las familias.

Indicador de producto 5. Instituciones educativas rurales con acompañamiento para la resignificación de sus PIER desde la diversidad ambiental y relaciones productivas. **Organismo responsable:** Secretaría de Educación

-Dimensión 4. Cali, Gobierno Incluyente

403 Línea Estratégica: Ciudadanía Activa y Gobernanza. 403001 Programa Ciudadanía Empoderada, el objetivo de este programa es robustecer las capacidades de gestión de la ciudadanía, para la renovación y transformación de liderazgos en el Distrito Especial, fortaleciendo los mecanismos de planeación participativa, formación en cultura ciudadana, control social, veedurías ciudadanas y desarrollo del sistema municipal de cultura. El programa propende por la disminución de las barreras de acceso de participación de las mujeres y jóvenes, y el fortalecimiento de sus procesos organizativos para incidir en la planificación territorial y en presupuestos participativos.

Indicador de producto 9. Mujeres de la zona rural y urbana vinculadas a procesos de formación política desde la perspectiva de género y diferencia. **Organismo responsable** Secretaría de Bienestar Social

6. Coherencia con el Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI (Territorio): Este proyecto de acuerdo se propone dentro del marco de la distribución de los proyectos de origen territorio en lo programado para comunas y corregimientos en la vigencia 2021 dentro del POAI, para el *Fortalecimiento a la competitividad de los emprendimientos rurales de las mujeres, con enfoque diferencial en corregimientos de Santiago de cali.*

Es además, el resultado de la consulta ciudadana llevada a cabo entre la población de las diferentes comunas y corregimientos, que tuvo la oportunidad de hacer parte de un espacio de selección de ideas de proyectos para el desarrollo de su comuna o corregimiento, y se elaboraron presupuestos de acuerdo a las necesidades encontradas, con el fin de que los Ediles pudieran priorizar proyectos según el presupuesto asignado a cada comuna o corregimiento, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Cali, Unida por la Vida” acorde a lo programado en el Plan Indicativo.

CORREGIMIENTOS	VALOR
MONTEBELLO	\$ 80,000,000
LA ELVIRA	\$ 84,000,000
PICHINDÉ	\$ 107,963,000
EL SALADITO	\$ 137,512,839
VILLACARMELO	\$ 186,852,175
PANCE	\$ 214,000,000
LA PAZ	\$ 260,184,583
FELIDIA	\$ 281,850,924
LA LEONERA	\$ 308,726,000
NAVARRO	\$ 336,978,508
LA CASTILLA	\$ 343,363,228
EL HORMIGUERO	\$ 379,485,714
GOLONDRINAS	\$ 392,334,399
LOS ANDES	\$ 505,908,190
LA BUITRERA	\$ 672,402,305
TOTAL	\$ 4,291,561,865

Imagen 2 - Presupuesto POAI por Corregimientos

Según el Artículo 14 del POAI 2021, se evidencia el presupuesto desagregado por grupos vulnerables.

Grupos Vulnerables	Valor	% de Participación
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes	\$ 867.757.142.963	93,38%
Adulto Mayor	\$ 14.859.015.796	1,60%
Victimas	\$ 20.530.480.887	2,21%
Discapacidad	\$ 6.142.363.400	0,66%
Mujeres	\$ 11.126.710.861	1,20%
Etnias	\$ 5.644.359.961	0,61%
Equidad de Genero	\$ 3.200.698.751	0,34%
Total	\$ 929.260.772.618	100,00%

Imagen 2 - Presupuesto POAI por Grupos Vulnerables

Proyectos del POAI 2021 que se relacionan con el presente proyecto de Acuerdo

- BP-26003137 DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES A MUJERES PARA LA EMPLEABILIDAD EN SANTIAGO DE CALI \$ 300,000,000
- BP-26003141 DESARROLLO DE PRÁCTICAS EQUITATIVAS Y DE GÉNERO QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y SU AUTONOMÍA ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI \$ 670,665,536
- BP-26003230 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A LOS EMPRENDIMIENTOS RURALES DE MUJERES DEL CORREGIMIENTO PANCE DE SANTIAGO DE CALI. \$ 114,000,000
- BP-26003089 FORMACIÓN POLÍTICA A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIFERENCIAL EN SANTIAGO DE CALI \$ 681,729,804

7. Competencia del Concejo del Municipio de Santiago de Cali Distrito Especial

De conformidad con el numeral No.1 del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a los Concejos reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

Como también la Resolución 21.2.22.583 del 30 de septiembre del 2013, por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Santiago de Cali, el cual expresa que:

“Art.140 Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales individualmente considerados o agrupados en bancadas, el alcalde y en materia relacionados con sus atribuciones, por el personero, el contralor y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente”



Por lo citado anteriormente, en mi calidad de concejala de la ciudad de Santiago de Cali propongo el presente proyecto de acuerdo para su estudio e incorporación por parte de los y las demás concejales de la ciudad:

Atentamente;

ANA LEIDY ERAZO RUIZ

AUTORA

PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL No. ____

“POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON ENFOQUES DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Concejo Municipal de Santiago de Cali en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contempladas en el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y por la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Creación del programa. Se crea “El Programa de Formación para el Empoderamiento Socioeconómico de las Mujeres Rurales de Santiago Cali Distrito Especial” desde los enfoques de derechos, diferencial y de género, con el fin de posibilitar la reducción de las brechas y desigualdades que viven las mujeres de las zonas rurales, así como la articulación entre el ámbito rural y urbano del municipio desde la equidad y la justicia social.

ARTÍCULO 2. Responsables. “El Programa de Formación para el Empoderamiento Socioeconómico de las Mujeres Rurales de Santiago Cali Distrito Especial” deberá ser formulado por la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social y la Subsecretaria de Equidad de Género, en articulación con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA y la Secretaría de Educación Municipal, con participación efectiva y vinculante de las mujeres u organizaciones de mujeres rurales del municipio.

ARTÍCULO 3. Evaluación, seguimiento y control. Las instituciones responsables de la formulación, ejecución y financiación del programa deberán llevar a cabo la evaluación, seguimiento y control de éste. Así mismo, presentarán un informe anual ante el Concejo Municipal de Santiago de Cali.

ARTÍCULO 4. Principios orientadores. “El Programa de Formación para el Empoderamiento Socioeconómico de las Mujeres Rurales de Santiago Cali Distrito Especial” se enmarca en los principios constitucionales, en los pactos y convenios que ha aprobado el Estado Colombiano para garantizar los derechos de las mujeres y por lo tanto debe basarse en los siguientes principios:

- a. **Igualdad y no discriminación:** para considerar, valorar y favorecer las diferencias en necesidades, intereses, comportamientos y aspiraciones de mujeres y hombres respecto a los mismos e iguales derechos. Es fundamental garantizar el principio de igualdad y no discriminación a las mujeres y que éstas adquieran igualdad real.
- b. **Reconocimiento de la diversidad y de las diferencias desde un enfoque de derechos:** el programa comprende como principio el reconocimiento de la diversidad de mujeres que habitan nuestro territorio y considera con especial atención a aquellas del sector rural que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que plantea un enfoque diferencial de derechos para garantizar el goce integral de éstos, desde el reconocimiento de las diferencias y en muchos casos de la intersección de las múltiples discriminaciones que las afectan (por su condición etaria, étnica, campesina, rural, por orientación sexual e identidad de género, con discapacidad, entre otras).
- c. **Participación y consulta:** el programa reconoce a las mujeres como actrices sociales y políticas, interlocutoras y sujetas de derechos, como condición para el ejercicio pleno de su ciudadanía. De acuerdo con este principio, el programa responde a un proceso participativo de consulta que incorpora el sentir y la experiencia de las mujeres.
- d. **Corresponsabilidad:** se refiere al compromiso, la complementariedad y la concurrencia de todos los sectores sociales con la igualdad de género y para ello prevé la realización de acuerdos interinstitucionales que desde el Estado garanticen la viabilidad del programa en beneficio de los grupos y organizaciones de mujeres rurales involucradas.
- e. **Sostenibilidad:** el programa requiere que el Estado garantice su materialización y proyección en el tiempo, para ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y humanos necesarios para su implementación en aras de garantizar la transformación de la actual situación que enfrentan las mujeres rurales.

ARTÍCULO 5. Caracterización de la población. La ejecución del programa inicia estableciendo una línea de base, que permite identificar cuál es la situación de las mujeres rurales en relación con los indicadores que hacen parte del programa al momento de iniciar su ejecución. Dicha línea de base deberá combinar métodos cuantitativos y cualitativos (encuesta, entrevistas, grupos focales) que permitan tener hallazgos significativos en todos los indicadores involucrados en el programa. Al finalizar el proceso también deberán llevarse a cabo evaluaciones de resultados para establecer cuál fue el impacto de este en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, en el logro de su empoderamiento y autonomía económica, su participación y el impacto de estos en la reducción de las violencias de género.

Parágrafo 1. La línea de base debe recoger datos sobre:

- Características demográficas.
- Indicadores de calidad de vida y desarrollo humano (Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pobreza y tasa de desempleo, desagregadas por género).
- Indicadores sobre las capacidades productivas y las condiciones de acceso a los instrumentos de desarrollo rural (medios de producción, asistencia técnica, formación y capacitación, crédito y comercialización, entre otros).
- La necesidad de proyectos de infraestructura y equipamiento (vías, vivienda, salud, educación, agua y saneamiento básico, riego y drenaje).
- Indicadores económicos asociados a las necesidades específicas del trabajo de las mujeres rurales (acceso a la propiedad de la tierra, a recursos productivos, a la asistencia técnica, a las prestaciones sociales, la incorporación a las cadenas de suministro, el acceso a subsidios para la construcción y para el mejoramiento de vivienda de las madres cabeza de familia, a la formalización laboral, el fortalecimiento a sus formas de organización y producción, entre otros).
- Indicadores de violencia de género (maltrato físico, psicológico, violencias sexuales, patrimoniales, etc.), así como del acceso a la justicia frente a dichas violencias, la capacidad de participación social y política y los imaginarios, actitudes y comportamientos alrededor de los roles y estereotipos de género.

Parágrafo 2. Dado que el género es una construcción relacional y que las mujeres conviven con hombres -padres, hermanos, amigos, compañeros, hijos- permanentemente y en todos los ámbitos de su cotidianidad, es importante que los instrumentos de recolección de información utilizados para establecer la línea de base incluyan a los hombres. Sus imaginarios y prácticas frente a los roles de género, al trabajo doméstico, a la formación, el emprendimiento y el empoderamiento femenino, pueden arrojar información relevante frente a las situaciones que viven actualmente las mujeres, al tiempo que pueden ser un factor determinante en la posibilidad de las mujeres de vincularse al programa.

ARTÍCULO 6. Certificación de participación en el Plan de formación. Certificar formalmente los saberes obtenidos mediante la participación en el programa, puede ser mediante la modalidad de ciclo propedéutico técnico o diplomado; lo que además de aportar al incremento del capital humano, social y económico en el sector rural, posibilita la generación de capacidades para el empoderamiento individual, familiar, comunitario y social de las mujeres rurales.

ARTÍCULO 7. Garantía de condiciones para la sostenibilidad de las mujeres en el programa. El programa deberá garantizar la sostenibilidad de las mujeres rurales en la totalidad del programa, evitando así la deserción.

ARTÍCULO 8. Red de Protección y Veeduría. Esta red tendrá como fin garantizar que el diseño y ejecución del Programa se dé bajo la garantía de una gestión pública transparente,

oportuna, coherente y sistemática, supervisando el uso o destinación de los recursos, el cumplimiento con los enfoques, con los tiempos de ejecución y demás especificaciones que hacen parte del articulado. Estará conformada por:

- Secretaria del Bienestar social.
- Secretaria de Desarrollo Económico.
- Representante de la Subsecretaría de Equidad de Género
- Delegada del Comité de Mujer del Municipio.
- Representante elegida por las organizaciones cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos de la mujer.
- Representante Instituciones de Investigación y/o Transferencia de Tecnología.
- Representante elegido por las Juntas Administradoras Locales de la zona rural.
- Representantes de las comunidades rurales del municipio.
- Representantes de las entidades públicas departamentales, regionales y nacionales, que adelantan acciones de desarrollo rural en el municipio.
- Representante Asociación de Profesionales Informales y Campesinos.
- Representante por las organizaciones de base para el eje temático representación de la zona rural.
- Representante de los medios de comunicación.

Parágrafo 1. La Red de protección y veeduría del programa tendrá una frecuencia de encuentro de al menos dos veces al año, al inicio y final correspondientemente.

ARTÍCULO 9. Ámbito de aplicación. “El Programa de Formación para el Empoderamiento Socioeconómico de las Mujeres Rurales de Santiago Cali Distrito Especial” se implementará en los diferentes corregimientos de la ciudad en los que se encuentren representadas las mujeres rurales a partir de sus diferentes modos de expresión.

ARTÍCULO 10. Fases del programa.

- **Fase 1.** Empoderamiento de las mujeres rurales desde el enfoque de género, con el fin de comprender el rol de la mujer en la sociedad, para desmontar imaginarios sexistas, machistas y misóginos que han sido naturalizados y visibilizar sus saberes y conocimientos, así como el aporte que con su trabajo productivo y reproductivo hacen desde siempre al país.
- **Fase 2.** Formación a partir de la alfabetización y la alfabetización digital, con el fin de disminuir las brechas en el acceso a educación y diferencias socioeconómicas que existen entre hombres y mujeres que viven en las zonas rurales.
- **Fase 3.** Diseño de proyectos productivos, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas concretas del sector rural y de las mujeres vinculadas al programa.

- **Asistencia técnica.** Debe ser transversal, es decir debe garantizarse desde el inicio hasta el final del programa y debe estar encaminada a posibilitar la formulación de los proyectos así como su gestión y puesta en marcha.

ARTÍCULO 11: Creación de un banco de proyectos. Los proyectos construidos por las mujeres rurales vinculadas al programa entrarán a hacer parte de un banco de proyectos a través del cual se pueda generar conocimiento y difusión de las iniciativas, incentivar un manejo transparente de los recursos y facilitar el seguimiento a las inversiones llevadas a cabo desde el programa para la financiación de cada proyecto.

ARTÍCULO 12. Adopción. Facúltase al Alcalde Distrital para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia, reglamente el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 13. Vigencia. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.